

ANÁLISIS SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO DE LOS INDÍGENAS DESPLAZADOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ CARRERA SÉPTIMA (2016-2018)

Presentado por:

BACHILLER VALBUENA VALERIE 041131241

LLOREDA PALACIOS WENDY SAMARA 041131630

Director:

Paula Mazuera

Universidad Libre Bogotá

Facultad de Derecho

Centro de Investigaciones Socio Jurídicas

2019

**ANÁLISIS SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO DE LOS INDÍGENAS
DESPLAZADOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ CARRERA SÉPTIMA (2016-2018)**

Presentado por:

BACHILLER VALBUENA VALERIE 041131241

LLOREDA PALACIOS WENDY SAMARA 041131630

Universidad Libre

Facultad de Derecho

Centro de Investigaciones Socio Jurídicas

Bogotá

2019

“Son cinco siglos de lucha sin descanso en busca de asegurar la vida y los derechos de nuestra gente y son dos siglos de esperanzas perdidas en la justicia, la libertad y la igualdad que se prometieron al mundo con la Declaración de los Derechos del Hombre”¹.

¹ Rojas Birry. Muelas Hurtado Lorenzo. Constituyentes indígenas Muelas Hurtado. Asamblea Constituyente. 1991.

Al terminar exitosamente este arduo trabajo, nuestro primer sentimiento de gratitud es para nuestra familia, nuestros amigos y para nuestros allegados, quienes nos apoyaron comprometidamente con esta meta, pero aún más importante es el caso de agradecimiento a aquellas personas que vemos diariamente a nuestro alrededor a través de diferentes escenarios, quienes nos demostraron que con su dedicación se pueden lograr grandes cambios, por aquellos a quienes amamos, por ser aquella fuente de inspiración, por ser este pueblo tan arraigado a sus costumbres por mostrarnos que esta lucha por nuestra idiosincrasia, por nuestras raíces y por nuestra humanidad todavía continúa.

Aceptación

Valoración:

Calificación: _____

Dra. (r)

Jurado

Dra. (r)

Jurado

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Presidente

Jorge Alarcón Niño

Vicepresidente Nacional

Jorge Gaviria Liévano

Rector Nacional

Fernando Dejanón Rodríguez

Censor Nacional

Antonio José Lizarazo Ocampo

Rector Seccional

Jesús Hernando Álvarez Mora

Decano

Carlos Arturo Hernández Díaz

Secretario General

Floro Hermes de San José Gómez Pineda

Secretaria Académica

Ana Roció Niño Pérez

Director Centro de Investigaciones

John Fitzgerald Martínez Vargas

Coordinador del área de investigación

Belisario Daza González

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
• Planteamiento y formulación del problema de investigación.....	10
• Hipótesis.....	11
• Diseño metodológico.....	11
• Objetivos.....	12
 Capítulo 1	
Marco conceptual para las comunidades indígenas.....	14
1.1. El llamado al trabajo informal	18
1.2. Conceptualizaciones dentro del contexto de las comunidades indígenas.....	21
1.3. Las comunidades indígenas desde una mirada sociológica.....	28
 Capítulo 2	
Metodología de la Investigación.....	33
2.1. Marco Legal.....	36
2.2. La importancia del Convenio 169 de la OIT en Colombia.....	38
 Capítulo 3	
Sobre el Derecho al trabajo y las Garantías laborales de las comunidades indígenas en Colombia.....	46
3.1. La Organización Nacional Indígena de Colombia.....	48
3.2 Del Código Sustantivo del Trabajo.....	51
Conclusiones.....	60
Bibliografía general.....	65

TABLA DE CUADROS E IMÁGENES

Cuadro 1. Población indígena en Colombia país miembro del fondo indígena....	54
Imagen 1. Grafiti indígena.....	56
Imagen 2. Integrantes de comunidades indígenas entre la carrea 7ma y la calle 17 en el centro de la ciudad de Bogotá.....	57
Imagen 3. Integrantes de comunidades indígenas entre la carrea 7ma y la calle 17 en el centro de la ciudad de Bogotá.....	58
Imagen 4. Integrantes de comunidades indígenas entre la carrea 7ma y la calle 17 en el centro de la ciudad de Bogotá.....	59
Cuadro 4. Cronología de las decisiones de la Corte Constitucional en materia de población indígena desplazada.....	61
Cuadro 5. . Autos de la corte más relevantes en materia cultural y diferencial....	62

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país catalogado mundialmente con una extensa diversidad social y cultural, según el reconocimiento por parte del gobierno “viven alrededor de 87 pueblos indígenas identificados, los cuales hablan 64 lenguas amerindias y están distribuidos, según el censo 2005 en 710 resguardos ubicados a lo largo de 27 departamentos del país”². Aunque el gobierno los reconoce de esta manera, la ONIC por su parte, sostiene que hay “102 comunidades distintas, contabilizando a casi 1.400.000 personas indígenas es decir el 3.5% de la población, para el año 2005”³.

Sin embargo con ayuda del conflicto armado interno⁴, orientado por actividades ilícitas relacionadas específicamente con el narcotráfico y la explotación de tierras, la apropiación de terrenos se ha convertido en uno de los factores de riesgo que ha llevado a que de manera particular se afecte a los habitantes de las comunidades indígenas, generando un desplazamiento forzado de sus hogares. En un “Estado Social de Derecho como Colombia”⁵, se ha vislumbrado que estas problemáticas vulneran el desarrollo económico y cultural de estas comunidades

² UNHCR. Colombia Situation Indigenas (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela).

³ ONIC. Cuáles son, cuantos y donde se ubican los pueblos indígenas de Colombia.

⁴ En donde se refiere: “Las cifras de violaciones a los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas acá presentados constituyen un esfuerzo de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC; realizando seguimiento desde noviembre de 2016 a 05 de julio de 2018 la violación a los DD.HH e infracciones al DIH, notando un incremento de 6.055 personas (noviembre de 2016 a diciembre de 2017) a 10.599 entre el 1 de enero al 05 de julio de 2018: Entre las tipologías de seguimiento a las violaciones a los Derechos Humanos -DDHH- e infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- correspondiente al año 2018 durante la implementación del Acuerdo Final de paz, se han visto afectadas de la siguiente manera: confinamiento (9.422), desplazamiento masivo/forzado (1.047), amenazas (50), reclutamiento (20), homicidio (21), atentados (19); torturas (3); y 3 muertes por omisión del Estado de población en condición de desplazamiento y reubicada, para un total de 10.599 personas afectadas”. ONIC denuncia la continua y sistemática violación de los Derechos Humanos y el exterminio físico y cultural contra los Pueblos Indígenas de Colombia. Julio 2018.

⁵ Corte Constitucional. Auto 004 del año 2009.

dado que alteran el desenvolvimiento de sus costumbres generando un declive cultural.

Estas comunidades en su mayoría se desempeñaban en labores como la caza, pesca, agricultura, cría de animales, confección de prendas, artesanías entre otras, siendo todas ellas una parte fundamental de su cosmovisión para poder sobrevivir y suplir sus necesidades básicas y arraigos que se han perdido dada la indigna situación de trabajo en la zona urbana en la que se encuentran.

Planteamiento y formulación del Problema

Para el desarrollo de esta investigación se pretendió analizar algunas políticas públicas en general, que han sido propuestas por el Estado colombiano respecto de la situación de los indígenas desplazados hacia la ciudad de Bogotá y se buscaron cuáles de ellas protegían y garantizaban el derecho al trabajo, teniendo como finalidad señalar el compromiso de respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de los pueblos indígenas, de manera que se pueda proponer una solución eficaz a la problemática planteada, todo ello con base en las necesidades encontradas en estas comunidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este proyecto se buscó dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo podrían hacerse efectivas las políticas públicas sobre el derecho al trabajo de las minorías étnicas -en caso de que las hayan- establecidas por el Estado colombiano, o qué propuesta de política pública podría respaldar la protección del derecho al trabajo digno de los indígenas desplazados ubicados en la ciudad de Bogotá, localidad de la candelaria entre las calles 12 a la 17?

Hipótesis

La efectiva protección del derecho al trabajo digno, brinda la oportunidad a los integrantes de las comunidades indígenas, que se han visto obligados a desplazarse a la ciudad de Bogotá, de desarrollarse en un entorno muy distinto al suyo, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y la de sus familias, sin embargo dado el enfoque integral que se quiere dar en la presente investigación, es decir, de conformidad al ser humano, a la persona en específico, en sus diferentes ámbitos y a su cosmovisión, se requeriría de entidades tanto privadas como públicas que cuenten con la capacidad de crear e implementar nuevos espacios, los cuales se apropien para mantener, recordar y respetar esta cultura, sin que se vean vulnerados los derechos de los indígenas desplazados y contrario *sensu* se les sean garantizados. En este orden de ideas, se propone la hipótesis de que la problemática propuesta se solucionaría dejando planteada una política pública laboral que permita no solo crear espacios dignos para el desarrollo de actividades artesanales y demás, sino que puedan trabajar con garantías laborales reales en cualquiera que sea el ambiente en el que se desempeñen.

Diseño metodológico

Para desarrollar la pregunta de investigación la metodología a utilizar fue deductiva-cualitativa, realizando un trabajo de observación respecto a sus costumbres y condiciones de vida, para luego hacer un análisis de la información recolectada; además de esto, se partió de lo particular a lo general, estudiando el colectivo censado por el grupo de investigación y así mismo se relacionaron y analizaron los estudios y/o convenios que tiene el Estado a través del ministerio

del interior como órgano encargado principalmente de las políticas públicas en esta problemática del desplazamiento, y más directamente en Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, por medio de la Subdirección de Asuntos Étnicos y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. El método utilizado fue el *hermenéutico*, ya que en la investigación se realiza un ejercicio de interpretación de los diferentes factores y situaciones que llevaron a lo largo de la historia a las condiciones en las que se encuentran hoy los indígenas desplazados en Colombia, partiendo de la comprensión del textos, la explicación de los mismos y finalmente llegando a la interpretación de los datos plasmados en la investigación.

Objetivos

Objetivo General de esta investigación

Realizar un recorrido histórico y social sobre las comunidades indígenas que permita establecer cómo sus integrantes al estar inmersos en la problemática del desplazamiento forzado son mayormente afectados en su derecho al trabajo digno, dentro de otros territorios en este caso, en la ciudad de Bogotá, proponiendo de esta manera establecer una posible solución a esta problemática.

A partir de este objetivo general se desprenderán otros más concretos como lo son:

1. Destacar qué herramientas sociales tendientes a la inclusión y adaptación de grupos étnicos minoritarios se pueden utilizar para brindar un derecho al trabajo digno a los indígenas desplazados.

2. Proponer una posible solución frente la falta de ejecución de políticas públicas que brinden una efectiva protección al derecho al trabajo digno de los indígenas desplazados.

3. Señalar, qué posibles soluciones se han planteado anteriormente frente a esta problemática de conformidad a la labor de entidades estatales encargadas.

Respecto de la zona en la que se va a desarrollar el proyecto de investigación, es la localidad de la candelaria ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá D.C y se conforma por algunos barrios y sectores entre ellos el sector ubicado *en la carrera séptima desde la calle 12 hasta la calle 17*. Esta es una franja estratégica para el estudio, ya que se observó una notoria población indígena asentada laborando informalmente como vendedores ambulantes.

CAPÍTULO I

Marco conceptual para las comunidades indígenas

Para abordar la problemática del desplazamiento indígena, primero se debe hacer referencia a la exclusión laboral que los indígenas han sufrido a lo largo de la historia⁶, puesto que a partir de ahí se pueden ir comparando las causas que han llevado a estas comunidades a dejar sus territorios y consecuentemente la forma en como no se ha visto garantizado el derecho al trabajo digno desde hace mucho tiempo atrás. Antes de la llegada del imperio español a Colombia, no se tienen muchos datos acerca de los fenómenos que sucedían en América se sabe que este era un continente habitado en su mayoría por grupos indígenas en los cuales existía una organización jerárquica en la cual se dividía el trabajo, que al igual que hoy se hacía por la necesidad de sobrevivir según los estándares de calidad establecidos por cada pueblo.

Después de la llegada del imperio español algunos de los historiadores como David Bushnell ⁷ explica que los indígenas para la época fueron sometidos a tratos denigrantes, tan es así que antes de la creación de las leyes de indias, estos fueron tratados como esclavos. “Las primeras relaciones entre españoles e indios ponen en contacto a dos grupos separados, aislados, que apenas se tocan, con mayor o menor violencia, en la periferia de sus formas de vida social; Los españoles comercian con el indio, o se apropian sus riquezas, o lo atacan con la fuerza de las armas y roban sus bienes o sus hombres; en todos estos casos la autonomía de las dos sociedades, momentáneamente puesta en cuestión, se restablece inmediatamente”.

El indígena continúa con su vida, sembrando como estaba acostumbrado. Para los españoles esto no fue rentable, dado que la esclavización se convirtió en una

⁶ BELLO. Álvaro, Rangel Marta, La equidad y la exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Revista de la Cepal 76, 2002.

⁷BUSHNELL. David, Colombia una nación a pesar de sí misma. Editorial Planeta, 2000, p.27.

apuesta contraproducente para ellos, por ende, su esclavitud debía novar ahora iban a estar en un grupo político más amplio, dentro del cual ocuparían la posición más baja que se podía ocupar en la época del feudalismo y estarían obligados a organizar su trabajo de modo tal, que pudieran producir un excedente para el pueblo conquistador. Dicha forma de organización va a surgir como la encomienda, la cual radicaba en que un grupo de indígenas iba a ser entregado o “encomendado” a un conquistador que obtenía el derecho de a utilizar a los indios en sus diversas empresas económicas y a cobrarles un tributo, se obligaba en cambio a adoctrinar a los indios y a mantener caballos y armas para defender la ciudad española de cualquier ataque.

Avanzando un poco históricamente, en la independencia de la nueva granada que más adelante se convertiría en Colombia, se sabe que los indígenas estaban en contra de la idea independentista afianzados a la idea de que con los españoles estaban y estarían mejor. El historiador Jairo Gutiérrez Ramos⁸ menciona que desde 1813 el gobierno realista instalado en Santa Marta afrontó el permanente asedio de los ejércitos insurgentes de Cartagena y Santafé, que en más de una ocasión fueron rechazados gracias al apoyo de los indios que residían en los pueblos vecinos de Mamatoco, Gaira, Bonda y Ciénaga. Fue tan importante el respaldo de los indios que en 1816 el gobierno español nombró capitán de los reales ejércitos al cacique de Mamatoco.

Subsiguiente a este periodo se dio la organización de Colombia como Estado y en medio de esta etapa, movimientos sociales buscaron ver desde otra óptica a los indígenas. En este contexto se expidió la ley 89 de 1890 **“Por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”**⁹. Además de esto se hicieron distintos acuerdos con entidades religiosas para la civilización de grupos indígenas, con

⁸GUTIERREZ, Jairo. Revista Credencial Historia. Edición 247, 2010.

⁹COLOMBIA. Congreso De La Republica Ley 89 (25, noviembre, 1890) Por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Bogotá. 1890.

avenimiento del frente nacional fue fundada una adscrita al Ministerio de Gobierno oficina de Negocios Indígenas, transformada posteriormente en la División de Asuntos Indígenas a través de la cual se buscaba la creación de nuevos resguardos indígenas dentro del territorio nacional.

En sí adentrándonos en la época de la civilización en Colombia, la problemática frente al derecho al trabajo de los indígenas tiene su génesis en el siglo XX con la entrada del conflicto armado y sus diferentes aristas, entendiendo que como consecuencia de ello los indígenas al igual que los campesinos fueron forzosamente despojados de su territorio.

Tal y como lo señala la Corte Constitucional en el Auto 004, dentro del transcurso de la incursión del conflicto armado en el país, se ha reconocido esta drástica situación dada la continuidad de esfuerzos y lucha continua por las comunidades, esto lo reconoce la Corte señalando que “en el curso de la última década, el conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico, que se desarrolla en Colombia se ha convertido en el principal factor de riesgo para la existencia misma de docenas de comunidades y pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional, esta amenaza ha sido la causa principal del desplazamiento de los indígenas”¹⁰

El hecho mismo de que los habitantes de unas y otras ciudades tengan que desplazarse a otras regiones del país, hace que dentro de estas no haya la posibilidad de resistir el desplazamiento masivo, en otras palabras, es que lo que normalmente no opera con un cierto porcentaje, con un incremento del mismo mucho menos. Por lo tanto, esta falta de capacidad de albergar las comunidades indígenas no solo por la cantidad poblacional, sino porque dentro de otros factores también se encuentra el que culturalmente no se encuentran sensibilizados ni capacitados para llevar una sana convivencia dentro de los distintos espacios de trabajo, educación, puntos de cohabitación y otros lugares de esparcimiento.

¹⁰ Corte Constitucional. Auto 004 del año 2009. Afectación diferencial de los pueblos indígenas por el conflicto armado y su impacto sobre los factores de desplazamiento o confinamiento.

“Las ciudades en Colombia no están preparadas para recibir a los indígenas ni los indígenas para habitar la ciudad. *Existen grupos identificados en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Montería, Villavicencio, Popayán, Cali, Pasto, donde viven en condiciones deplorables. Algunos realizan rituales adaptados para sobrevivir. Las mujeres y las niñas trabajan en el servicio doméstico sin las garantías laborales y de protección legales. En algunas ciudades intermedias, como Pasto o Popayán, estas mujeres son discriminadas y explotadas. Algunas comunidades religiosas también utilizan niños y niñas para los servicios domésticos*”.¹¹

En este sentido se encontró una monografía elaborada por Alba Jakeline Ruano Jiménez en la universidad de Medellín, en la cual analiza el problema de inserción laboral de las personas desplazadas que residían en la ciudad de Ipiales en el año 2010.

La autora decidió plantar su tesis en cuatro grandes puntos los cuales son:

1. “La ciudad frontera y el contexto laboral
2. El trabajo informal, la alternativa laboral del rebusque
3. Redes sociales y familiares
4. Reflexiones finales”¹²

En la primera parte la autora estableció que la ciudad de Ipiales se encuentra sobre la frontera con “Ecuador; en el Nudo de los Pastos, en el altiplano andino; relativamente cerca de la costa del océano Pacífico, al piedemonte amazónico y a la línea equinoccial; siendo una región panamazónica. A pesar de su ubicación hay escasas oportunidades de empleo para la población que reside y para los migrantes”¹³.

¹¹SÁNCHEZ, 2006, p. 30.

¹² Ibídem.

¹³JIMÉNEZ, Alba Jakeline. Inserción laboral de la población desplazada por el conflicto armado en la frontera colombo ecuatoriana. 2012.

“El municipio tiene una economía estática en la cual solo hay pequeñas y medianas empresas en donde se desarrolla el sector agropecuario y comercial, el auge o decadencia de las empresas dependiendo en su gran mayoría del cambio en las tasas de los países vecinos, es por esto que el comercio informal está basado en su gran mayoría en el contrabando ya que hay falta normativa y acuerdos tributarios con Ecuador, aunque sí existe una ley la 191 de 1995 que no solucionó el conflicto en su totalidad”. Este comercio informal básicamente se basa en el contrabando de gasolina de un país a otro, transporte de mercancía, compra y venta de mercancía y transporte de personas.

El llamado al trabajo informal

La población indígena pese a múltiples circunstancias anteriormente señaladas, se ha visto forzada a trabajar informalmente para solventar las necesidades fundamentales como alimentación y vivienda. Una de las formas de proveer estas necesidades fueron el trabajo de mano de obra a través de las artesanías, productos tradicionales de las comunidades indígenas representativos de esta población, estas técnicas de trabajo son una muestra viva de la materialización del conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso del entorno geográfico en el que se encuentran, el cual es transmitido de generación en generación.

La falta de oportunidades ha permitido que este sector de la población deba recurrir a la informalidad para poder subsistir siendo en muchas ocasiones su ingreso mensual inferior al salario mínimo mensual legal vigente sin prestaciones económicas y seguridad social que se tendrían en un trabajo formal.

Organizaciones sociales que han estado al tanto de esta cadena o círculo rotativo de problemáticas a nivel internacional o interamericano como es el caso del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF, realizando diferentes informes

para los países latinoamericanos entre ellos no podría faltar Colombia señalando que *“El trabajo no es exclusivo para los adultos con la migración a nuevas ciudades los niños y pre- adolescente se ven incorporados de manera lenta al mercado laboral, en donde no tienen ningún tipo de protección. En algunos pueblos hoy el trabajo consiste en otras formas: comprar el gas o la gasolina, recoger coca para el mercado, lo que manifiesta cambios en las actividades que históricamente desempeñaban estos niños y jóvenes”*.¹⁴

Después de analizar las fuentes de empleo de la población de Ipiales en la tesis se empieza a plantear la diferencia significativa que hay entre el trabajo formal y el informal basándose en Rakowski, dejando por sentado que el trabajo informal no es conveniente ni para el país ni para el individuo, ya que con este se evaden impuestos, “deslegitima al estado como ente que debe prever una solución a una población desprotegida, genera inconformismos entre ambos extremos y no garantiza que un núcleo familiar pueda suplir el mínimo vital. No obstante, el trabajo informal se convierte en una opción racional para romper las barreras legalistas que el estado ha impuesto a los pequeños comerciantes”.

El autor empieza su estudio narrando que la discriminación laboral es “una manifestación social, que se evidencia en distintas situaciones y formas teniendo su origen en el prejuicio social, basado en estructuras de subordinación que se logran a través de la capacidad de competencia en cuanto a la formación educativa a la cual muchos indígenas por sus convicciones frente al territorio no han podido acceder”. Una solución para este problema ha sido el desplazamiento, no solo, de las poblaciones indígenas sino de todo aquel que es marginado por las circunstancias laborales desfavorables.

La tan anteriormente mencionada “discriminación”, hace referencia al acto en el cual “los empleadores y trabajadores tienen un trato diferencial para individuos de un determinado grupo social”, el autor cita un estudio de la OIT (2003) en donde se intenta explicar por qué sucede este fenómeno en la sociedad latinoamericana,

¹⁴ UNICEF. Informes pueblos indígenas en Colombia.

indicando que este fenómeno rezagó de la época colonial en donde hay una idea y estereotipo de la persona generando así condicionantes de orden histórico, económico y social, en donde se encontraba un mayor índice de este factor dentro del mercado laboral.

Teniendo en cuenta el conflicto socio jurídico el autor da unas posibles hipótesis de la causa del conflicto señalando así:

“ha surgido por las reiteradas políticas del Estado colombiano que se han ido plegando a los intereses foráneos que los favorecen por una apertura económica, una privatización; la formación de zonas de libre explotación y comercio en manos de multinacionales así como la apropiación de tierras que históricamente y por tradición han ocupado las poblaciones, al igual que los intereses de un mercado global que tiene capital foráneo”¹⁵.

Un ejemplo reciente de lo que se ha tratado de demostrar hasta el momento en esta investigación, es la situación que vive el pueblo wayú según el informe de la OIT en el que se señala que *“entre los wayú, en ciertas zonas, pequeñas minorías ejercen como clase dominante nativa y, en consecuencia, el trabajo asalariado es parte de la reproducción de la sociedad. Además del trabajo para otros, puede darse el caso de trabajo asalariado en el entorno familiar pero fuera del contexto comunitario. En las carreteras municipales y en vías interurbanas de mayor tránsito, en las esquinas de los semáforos y en los mercados públicos de las pequeñas y grandes ciudades, desde los 9 años de edad, o incluso menos, niños y niñas participan en la venta de productos alimenticios de preparación casera y artesanías en calidad de vendedores ambulantes”¹⁶.*

¹⁵GUEVARA, Darío Rubén, La Nueva colonización urbana el desplazamiento forzado. Cali. 2003. 205 Pág. Facultad de ciencias sociales. Universidad del Valle.

¹⁶ OIT. Trabajo infantil indígena en Colombia. Una síntesis de las miradas sobre el problema de las comunidades indígenas, los académicos y las instituciones. 2010. P 28.

El análisis realizado por el autor Andrés Mauricio Mendoza Piñeros, comienza haciendo referencia a una cifra un tanto preocupante para el Estado, en cuanto a que señala a Colombia como el segundo país del mundo en número de desplazados, después de Sudán. Más allá de perder sus tierras, su familia, su economía basada en determinada actividad, y su identidad cultural, se les priva de mecanismos que garanticen sus derechos fundamentales que están directamente ligados y relacionados con la dignidad humana, la cual como es evidente está ausente en la vida de muchas personas marginadas por este fenómeno.

El artículo estudia el impacto de la intervención del Estado, y las políticas que particularmente se están implementando con el fin de garantizar como ya se ha dicho los derechos de una población tan vulnerable como son los desplazados, y paralelo a ello se analiza qué factores determinan el hecho de que no se puedan garantizar cabalmente dichos derechos”¹⁷.

Conceptualizaciones dentro del contexto de las comunidades indígenas

Dentro de este acápite, se hizo referencia a la demarcación de los diferentes ejes conceptuales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta investigación siendo parte fundamental para cada pieza del mismo.

Se dará un primer inicio con el *desplazamiento forzado*, siendo un concepto base que se utilizó en este estudio como “una grave violación de los derechos humanos, tipificado según el código penal como “*él que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil*”¹⁸ siendo una clara infracción al derecho internacional humanitario (DIH)”, este fenómeno es evidenciado por la población indígena y es la razón por

¹⁷Ibídem.

¹⁸ Código Penal colombiano. Ley 599 del año 2000

la cual integrantes de las comunidades se ven obligados a llegar a las ciudades como Bogotá en busca de nuevas oportunidades, alejándose de la violencia en la que han estado inmersos y a la cual nunca quisieran regresar.

Este concepto se incluyó en el presente proyecto porque era imprescindible al hablar de minorías, sobre todo si se trata del despojo de sus territorios y por consiguiente, de la necesidad de migrar a otros lugares en donde la cultura es totalmente disímil a la suya, lo cual hace que pueda influir para la discriminación y todo tipo de actos negativos y excluyentes hacia ellos.

Por otro lado, cuando se mencionó la *inclusión laboral* fue relevante tratar el artículo 27 de la CDPD en donde se encuentran estipulados los derechos de las personas con discapacidad en relación al trabajo y de las minorías étnico raciales, “buscando un modelo que garantice buenas prácticas de inclusión, una de esas prácticas es el Empleo con Apoyo, el cual es definido en la enmienda a la ley de rehabilitación expedida en 1986 en USA, como trabajo real en ambientes laborales integrados debe ir de la mano de la formación de manera que beneficie a las personas implicadas. En Colombia, es pertinente que el currículo escolar incluya el componente de la formación para la vida y el trabajo en todas sus etapas y la implementación de criterios de evaluación, acreditación y certificación para el trabajo que facilite el empleo en equidad”¹⁹.

Si bien se entiende que los *derechos fundamentales* son derechos humanos positivizados en un ordenamiento jurídico concreto, es decir, son los derechos humanos concretados espacial y temporalmente en un Estado en concreto²⁰. Se quiere enfocar en la simple idea de que estos derechos, son inherentes a la persona, dentro del Estado y dentro de la sociedad, lo que concluye como consecuencia que este tipo de derechos, no están originados en el poder político, al contrario, es una obligación del Estado el respetarlos y hacerlos efectivos.

¹⁹Presidencia De La República. Decreto Ley 2663 de 1950 (05 agosto 1997) por el cual se promulga el código sustantivo del trabajo. Diario oficial No. 27407. Bogotá D.C

²⁰ FERNANDEZ, Antonio. Derecho Natural. Introducción Filosófica al Derecho, 1983. Págs.139-140.

Previo al análisis del significado de “cosmovisión”, fue fundamental que se recurriera a establecer su origen etimológico, en este sentido, se puede destacar que se trata de un neologismo, Weltanschauung, formado por palabras de la lengua alemana: Welt, que puede traducirse como “mundo”, y anschauen, que es sinónimo de “mirar”²¹; lo que quiere decir que la forma en la que ven el mundo las comunidades y los pueblos indígenas es única para cada uno de ellos, pero esto se ve obstaculizado en el momento en el que sus integrantes deban entrar en la civilización occidental, al ser despojados de sus tierras y tener que ir en busca de oportunidades a grandes ciudades su cosmovisión se va transformando y su forma de concebir el mundo también.

“La cosmovisión de los indígenas se fundamenta en su relación con la madre tierra y la madre naturaleza. En cambio la mayoría de la población mundial vive sin preocupaciones, sin saber cuál es su fuente de vida, olvida a sus generaciones del futuro. Más bien, vive contaminando y vive tratando de lesionar más y más a la tierra. Algún día esa tierra va a reclamar a la humanidad ese desprecio y esa destrucción. Cuando esto ocurra nos daremos cuenta de que la tierra es brava, enérgica y vengadora”²².

El significado de *idiosincrasia* está basado en “un grupo de características ancestrales adquiridas que determinan el carácter y la forma de ser que distinguen a una persona o un colectivo en general. Esta es una manera de ser que caracteriza a una persona o cosa y la distingue de las demás”; La *antropología* por su parte es “una ciencia humanística, o social, que se centra en el estudio del hombre en su forma integral”, otra definición que refiere al estudio del ser humano en sus distintas formas históricas, este término nos lleva a comprender el verdadero significado del hombre desde todas sus razas, independientemente de su cultura y costumbres, todos los hombres por el solo hecho de serlo son

²¹HEIDEGGER Martin Heidegger Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1993.

²² Menchú Tum, Rigoberta.

merecedores de unos derechos que cada Estado debe garantizar como el derecho al trabajo digno, a la dignidad humana y al mínimo vital.

Estos conceptos, son pieza fundamental del avance cultural y legislativo, reconociendo en diferentes fuentes del derecho que el Estado debe garantizar a las comunidades indígenas en cualquier parte del territorio colombiano, una efectiva protección de sus derechos por el solo hecho de ser humanos.

Las *costumbres* “son conductas que al ser practicadas con asiduidad se convierten en hábitos, que pueden ser individuales o colectivos”, dentro del presente, se habla de las conductas colectivas, es decir las de una comunidad como la indígena, donde sus costumbres están marcadas por un sello histórico y ancestral imborrable. De conformidad a estas costumbres integrantes de estas comunidades, se asientan en territorios y resguardos nacionalmente reconocidos en donde se les permite practicar sus costumbres y vivir su cultura con plena libertad, pero dentro del presente caso no sucede cuando no se encuentran en su territorio sino por el contrario, en un espacio en donde las costumbres son totalmente diferentes y en donde existen choques culturales, los cuales impiden en sí mismos el desarrollo cultural de estos integrantes.

Así mismo se asemeja al punto máxime, el concepto del *derecho al trabajo* el cual ha sido consagrado tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en la Constitución Política de Colombia de 1991, como “El derecho al trabajo consiste en la facultad que tiene toda persona de emplear su fuerza de trabajo en una ocupación lícita por medio de la cual pueda adquirir los medios necesarios para vivir ella y su familia decorosamente. El derecho al trabajo a conseguir empleo u oficio; toda persona tiene derecho a que no se le impida trabajar. Este no sólo se desprende de la obligación social del trabajo, sino que se origina de otros derechos, como el de la propia subsistencia y el sostenimiento familiar”²³.

²³ Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en la Constitución Política de Colombia de 1991. Derecho al Trabajo.

La OIT ha reaccionado desde un comienzo por cuanto propicia la formulación y desarrollo de políticas estatales que fomenten el pleno empleo productivo. “Estas políticas deben formar parte de la política general económica y social tendientes a garantizar la capacidad del estado de disponer diferentes tipos de empleo con ayuda del sector privado, en donde no haya ninguna discriminación para que sean ellas quienes puedan elegir libremente el empleo, de tal manera que también se les asista en la formación necesaria para aplicar a tales conocimientos”²⁴.

La Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por un lado, señala de manera importante “el tema de la vinculación del derecho al trabajo congeniado con la dignidad humana, por cuanto estas comunidades tienen que tener derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure al mismo y a su familia, una existencia que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

De igual forma lo ratifica el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Ley 74 de 1968 a través del cual los Estados partes reconocen el derecho al trabajo, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente escogido o aceptado y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este derecho y que dentro del mismo marco se asegure a los trabajadores condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.

Dentro de estas limitaciones internacionales, consejerías extranjeras respecto al derecho al trabajo señalan que los estados miembros subdesarrollados para lograr ese desarrollo económico tan esperado “deben cumplir ciertos requerimientos internamente entre ellos los salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos”²⁵.

²⁴ OIT. Derecho al trabajo.

²⁵ Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Ley 74 de 1968. Derecho al trabajo.

Es por ello que dentro del trabajo se señala también al *trabajo informal*, el cual se ha definido dentro de la OIT “Incluye todo trabajo remunerado (p.ej. tanto autoempleo como empleo asalariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores”²⁶. Por lo que se tiene un concepto de una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo.

El desarrollo del empleo informal de los indígenas desplazados a la capital, ha consistido en su gran mayoría, en abarcar diferentes espacios públicos logrando un punto de mayor acceso a personas que se interesen por sus productos artesanales, es por ello que los encontramos en lugares como iglesias, parques, calles en general atestadas de personas.

Este *espacio público* es entendido, como aquel conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes, en donde a través de la historia “en Grecia con el Ágora, en Roma con el Foro son espacios que posteriormente pasaron al servicio de la comunidad. Estas eran las plazas de carácter cívico en donde se desarrollaba la vida social, política y económica”²⁷, que ahora según la Ley 9ª "artículo 5" conforman las

²⁶ OIT. Empleo Informal.

²⁷ Organización De Estados Iberoamericanos Para La Educación la Ciencia y la Cultura fundación Nexos Municipales. Cartilla principios del espacio público. ESAP.

“zonas proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituya, por consiguiente, zonas para el uso o disfrute colectivo”²⁸.

Pese para la época no había una consolidación de las personas directamente afectadas por la falta de reconocimiento de los derechos de las culturas indígenas en el mismo derecho colombiano, recogieron no solo el derecho a la propiedad sino los demás derechos aún más simples pero que se han visto mayormente vulnerados como la vida, la salud y la integridad étnica social y cultural.

A pesar de la normatividad y jurisprudencia plasmada por la corte constitucional en sus diferentes casos, se ha llegado a la conclusión de que pese al gran avance y esfuerzo en pro de dichas comunidades victimizadas lo que se ve en el campo, en la investigación y estadística es otro escenario completamente contrario a lo que se esperaba como resultado positivo al reconocimiento de su autonomía e identidad como sujetos de derecho.

Es menester resaltar, la igualdad de esos derechos que dentro del deber legal que el estado está dispuesto a otorgar al individuo tal y como es señalado por la constitución, ya que se ha visualizado que esta clase de colectividades son marginadas y discriminadas tanto por la misma entidad como por los demás ciudadanos quienes se rehúsan a dar esa igualdad proporcionada, por el hecho de tener una apariencia dispar o inclusive por su lenguaje y tradiciones a las que comúnmente están acostumbrados a contemplar, es por ello que la corte ha hecho hincapié sobre esta problemática en donde se da una prohibición de cualquier forma de discriminación.

²⁸ Ley 9 del año 1989 artículo 5. Adicionado por el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Del Espacio Público.

Las comunidades indígenas desde una mirada sociológica

El sociólogo O. W Holmes insiste en *la necesidad para los juristas en apoyar su valor en el estudio desinteresado y empírico de la realidad social viva actual, como lo hacen las ciencias sociales y en especial la sociología*²⁹, este es el punto fundamental en donde la teoría del autor es importante para el presente proyecto de investigación, en tanto que se está refiriendo a un grupo humano en el cual convergen distintas dinámicas sociales, y que desde la mirada de los juristas se relaciona directamente con la intervención que debe tener el Estado y la administración estatal en torno a la necesidad de abrir escenarios laborales inclusivos para este grupo de personas que han sido forzosamente marginadas por la violencia en Colombia.

El problema jurídico planteado no puede mirarse simplemente desde la perspectiva jurídica, se debe abrir a otros campos del conocimiento como la antropología u otras ciencias sociales, debido a que el derecho al trabajo, como punto fundamental de esta investigación se encuentra íntimamente ligado al desarrollo del ser humano como tal, y por ende a todas las posiciones que pueda asumir el sujeto respecto de situaciones que le afecten su esfera emocional, intelectual, psicológica, entre otras.

“Han sido varias las posiciones de los grupos étnicos alrededor del mundo para afrontar problemáticas sociales que los sobrepasan, y es precisamente esa visión de la realidad de una manera distinta lo que los ha llevado a concebir el derecho como una institución a través de la cual puedan proyectar sus ideales en una sociedad, que pese a no ser aquella por la que permanentemente están rodeados, es una sociedad a la que pertenecen de una forma u otra por el simple hecho de estar asentados en el territorio de determinado país”, para el caso concreto, en el territorio colombiano.

²⁹HOLMES, O.w. Los fundadores americanos En: Sociología del derecho. Primera edición. Francia. Editorial Rosario, 1945.Pg 169.

El problema radica, cuando estas personas son expulsadas de manera arbitraria de sus territorios hacia otras partes del país a donde llegan a querer desarrollar esos mismos ideales que tiempo atrás se habían trazado y se encuentran con un escenario en donde no se les ofrecen oportunidades de ningún tipo.

Lo anteriormente mencionado es todo lo contrario a lo que el autor Holmes definiría como un “ requerimiento de un cuerpo sano de derecho, *en tanto que un cuerpo sano del derecho es aquel que corresponda con el sentimiento y las exigencias actuales de la comunidad*”³⁰, y es precisamente ello lo que no se satisface dentro de la realidad social de los indígenas desplazados a la ciudad de Bogotá, ya que se ven obligados a hacerlo con el único propósito de encontrar algún tipo de oportunidad laboral para la sostenibilidad de su grupo familiar.

Holmes cree profundamente en *la entera independencia del derecho de cualquier credo moral debido a su concepción puramente técnica y a su interpretación exclusivamente individualista de la moral*³¹, lo cual sirve para decir que el derecho en cualquier sociedad debe interpretarse desde un punto de vista bastante objetivo, es decir que independientemente de las personas que integren un grupo social o un grupo humano, se deben ofrecer las mismas condiciones de vida plena, atendiendo a cada necesidad individual pero garantizando la integridad de sus derechos fundamentales.

El derecho a lo largo de su historia se ha aplicado atendiendo a todas las formas sensibles de la comunidad, es por esto que se trata de una ciencia puramente social, con el único objetivo de hacer de la justicia un valor del que todas las personas puedan hacer gozar, esta justicia entendida como igualdad y reciprocidad en muchas formas. En tanto que las partes que integran esa sociedad puedan elegir los principios de justicia que crean aceptables y así poder aplicarlos para el conglomerado social, de forma que no se vea ese derecho a la justicia conculcado, sino por el contrario que se vea respetado por todas las instituciones

³⁰HOLMES, O.w. Los fundadores americanos En: Sociología del derecho. Primera edición. Francia. Editorial Rosario, 1945.Pg 170.

³¹Ibídem.

gubernamentales, en palabras de Holmes esto se traduce como “ *la vida del derecho no ha sido lógica, ha sido experiencia*”... *experiencia el contenido de lo que debe ser descrito por la sociología del derecho. Esta experiencia incluye no solo los datos sensibles externos y no solo la conducta, sino también símbolos y sentidos espirituales que inspiran la conducta social*³².

Por otra parte el también sociólogo Roscoe Pound sostiene que cada autoridad legislativa dentro de un país debe prestar especial atención a los problemas reales de la sociedad, lo que desde la interpretación que se le da a esta posición, quiere decir que el Congreso de la República y todas las demás ramas, no solo pueden legislar de manera abstracta sin miras a todas las problemáticas que convergen en el territorio nacional, sin tener en cuenta la cadena que se ha desarrollado por no atacar a una sola problemática en cuestión, es por ello que en el presente caso, las soluciones para el tema concreto de la inclusión laboral de los indígenas deben ser reales, eficaces y prontas porque es un fenómeno social que día a día se extiende aún más y que afecta primordialmente a los integrantes de este grupo social incluyendo mujeres y niños perjudicados.

Sin decir que no afecta, pero en menor medida a las personas que viven en las ciudades receptoras, la forma en como estas personas se ven afectadas se entiende en torno al problema de la informalidad a la cual se han visto obligadas a recurrir, al no encontrar otra forma de trabajo, se ven enfrentados a trabajar dentro de otra problemática social en nuestro país como lo es una informalidad que se resume en la toma de los espacios públicos de las ciudades y particularmente el centro de las mismas, y es allí en donde se evidencia como todas las dinámicas sociales están conectadas entre sí, es por ello que no se puede pensar que el problema de los pueblos indígenas solamente se ve reflejado en las zonas rurales del país, claramente repercute en todas las esferas sociales dentro del territorio nacional.

³²Ibídem.

El autor Pound *ha señalado fielmente la relatividad sociológica de las técnicas, categorías y conceptos jurídicos. Ha descrito su relatividad con referencia a tipos de sociedades totales y a la particularidad de sus tradiciones culturales*³³, es decir que los avances que se presenten en materia jurídica deben atender al común de la sociedad teniendo en cuenta las tradiciones particulares que tiene cada pueblo esto para no vulnerar derechos y creencias íntimas, lo anterior podría ocurrir en un escenario dentro del cual por proteger y querer garantizar ciertos derechos se caiga en una dinámica de imposición Estatal vulnerando entonces la idiosincrasia de dichos pueblos.

*“La sabiduría no se puede comprar así como— Nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua... Cada pino brillante que está naciendo, cada grano de arena en las playas de los ríos o los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina y hasta el sonido de los insectos, son sagradas para la mentalidad y las tradiciones de mi pueblo”.*³⁴

Como se ha mencionado, las comunidades indígenas están frente a un problema mucho mayor y es el de extinguirse paulatinamente, debido a diversos factores, siendo el desempleo uno de los más problemáticos y preocupantes, unido al analfabetismo del cual aún hacen parte gran parte de los indígenas, del desplazamiento forzado del cual también son víctimas, sin mencionar que el Estado no ha ejercido ninguna acción efectiva para mejorar esta situación, se ve claramente que aún hay mucho camino por recorrer para mejorar la calidad de vida de estas personas, se deben desarrollar y ejecutar políticas públicas definitivas que proporcionen un derecho al trabajo digno.

“Los territorios del planeta claman redención a la humanidad. Pero es una redención de cordura, no un proyecto de reclamación sobrenatural al final de la

³³POUND, Roscoe. Los fundadores americanos En: Sociología del derecho. Primera edición. Francia. Editorial Rosario, 1945.Pg 174.

³⁴ Fragmentos de la Carta del Jefe Sealth como respuesta ante la petición de compra del territorio indígena (en el actual estado de Washington). En la sabiduría de los indígenas de las Américas, obra inédita de Marcos Matías Alonso (2005).

historia. El propio planeta pide ayuda para las demás especies vivas. Es una fuerza interior y exterior y exige la integración de territorios y pueblos en armoniosa unidad. La tierra espera a quienes pueden discernir sus ritmos. El genio peculiar de cada continente, cada valle fluvial, las montañas accidentadas, los lagos tranquilos, todos piden que les alivien de la carga constante de la explotación – los pueblos y primeras naciones significamos este profundo sentimiento de los territorios del planeta”³⁵.

³⁵ Vine Deloria Jr

CAPÍTULO II

Metodología de la investigación

Para desarrollar la pregunta de investigación se decidió emplear el diseño metodológico cualitativo, de esta manera se realizó un trabajo de observación respecto a las costumbres y condiciones de vida de las comunidades indígenas para posteriormente hacer un análisis de la información recolectada.

Por otro lado, el método empleado en este estudio, fue el deductivo es decir partiendo de lo particular a lo general. Recaudando información sobre el ámbito del derecho al trabajo en el cual se ha visto inmersa la población indígena, para poder de esta forma concluir y dar los aportes para una posible solución a esta problemática en la que se encuentran los indígenas desplazados a la ciudad de Bogotá.

De igual forma, fue basada en el *método hermenéutico* dada la articulación tanto de la normatividad existente en torno al tema del desplazamiento indígena y del derecho al trabajo, como del impacto que la problemática genera en las dinámicas sociales, en este sentido se pretende interpretar los hechos de mayor relevancia, tanto legales como sociales, para llegar a una posible solución tendiente a proteger los intereses laborales de esta comunidad.

En esta investigación se distinguen tres etapas principales las cuales esbozan el sentido de la problemática a abordar:

1. La formulación del fin político del sistema normativo correspondiente: Este fin recae sobre la posible solución, que permita definir la situación del derecho al trabajo de manera que la legislación existente, que trata las distintas problemáticas de esta comunidad sea eficaz.
2. La problemática social que se pretende superar con el fin político: Este aspecto permite enfocar el desplazamiento forzado como una problemática social ya que, los indígenas huyen por motivos similares a los que obligan a

otros miles de colombianos a desplazarse: Confrontaciones armadas, amenazas, masacres, reclutamiento forzado de menores y jóvenes, apoderamiento de tierras por miembros insurgentes o Fuerza pública.

3. Las hipótesis normativas encaminadas a alcanzar el fin: Una posible solución normativa al problema planteado es formular, planear y coordinar una solución simple la cual logre orientar el aspecto laboral informal de los indígenas teniendo en cuenta el significado histórico que tiene esta comunidad para la nación, sin desconocer la actividad laboral que desarrollaban en sus territorios.

Comprendiendo que, para formular el derecho, se deben usar un conjunto de supuestos epistemológicos que es a lo que se le llama la investigación socio jurídica desde un punto de vista fáctico, siendo este un método de investigación, que tiene alcances directos con la problemática aquí planteada en el entendido de que los hechos constitutivos de ella, son de origen puramente social e impactan directamente en él.

Es por ello, que la presente investigación tiene una relevancia en la sociedad en tanto que los pueblos indígenas constituyen una parte importante del patrimonio cultural de la nación y por eso es un deber del Estado colombiano en compañía de la sociedad proteger integralmente los derechos de esta población, este interés social que se tiene frente a los pueblos indígenas se ve reflejado no solo a nivel nacional mediante las políticas públicas implementadas por el ministerio del interior sino también a nivel internacional siendo objeto de protección por parte de instituciones como la ONU, la CIDH, la OIT a través de su convenio 169³⁶ que han

³⁶OIT. Convenio 169. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión; Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales.

amparado de forma efectiva las necesidades que presentan los pueblos indígenas como minorías en el mundo.

Es importante resaltar la trascendencia que se les ha dado históricamente a los indígenas en aras de no olvidar las raíces que algún día intentaron ser desarraigadas y procurar el reconocimiento ancestral con que cuenta esta población.

Este proyecto es de gran utilidad para darle conocimiento a la sociedad de la falta de protección del Estado a estas comunidades en materia laboral, de manera que se puedan prevenir abusos e incluso disminuir la discriminación que sufren estas comunidades en razón principalmente de sus costumbres, cultura y creencias y sobre todo que les permita el acceso a un trabajo estable, digno y que mejore su calidad de vida, creando así sensibilización y conciencia del valor que tienen para el país y el mundo, en este orden de ideas, se pretende que este proyecto sirva de orientación para los que no conocen y de reflexión para aquellos que no entienden ni toleran la forma de vida de los pueblos indígenas y su calidad de sujetos de derecho.

La necesidad de realizar esta investigación surgió por la situación de desfavorabilidad que presenta este grupo étnico, debido al desplazamiento forzado por factores climáticos, patológicos y territoriales de los mismos, por lo que han tenido que desplazarse a la ciudad de Bogotá específicamente en el sector de la Candelaria, sin ninguna garantía de una provechosa situación laboral, obligándolos a tener que trabajar en las calles realizando actividades arriesgadas para sus hijos y familiares de mayor atención, todo ello sin que el Estado garantice medidas integrales que los ayude bien sea a regresar a su comunidad o a trabajar en la ciudad a través de mecanismos eficientes que mejoren su situación laboral y económica.

Viendo una clara desprotección por parte del Estado ante los pueblos indígenas quienes se encuentran en una situación de vulneración, esta será una investigación que aparte del análisis del derecho al trabajo digno de las

comunidades indígenas, también integrará una forma de hacer efectiva la protección de derechos fundamentales de los pueblos y comunidades que han sido forzosamente desplazadas hacia la ciudad de Bogotá, dando una real garantía de derechos como la dignidad humana, mínimo vital.

Marco legal para los derechos de los pueblos indígenas

Con la nueva apertura de los derechos humanos a nivel nacional y con la entrada en vigencia de la constitución política de 1991 en Colombia, se abrió un nuevo régimen y status de protección legal de los derechos enfocados en las comunidades que debían tener mayor protección como en este caso la de los indígenas.

En dicha “Asamblea Constituyente, había tres representantes indígenas: Francisco Rojas Birry, Lorenzo Muelas Hurtado y Alfonso Peña Chepe. Su participación permitió la inclusión de ciertas disposiciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y de otras minorías étnicas, empezando por el principio constitucional de que Colombia es un Estado multicultural y pluralista (art. 1).

Todas las culturas son iguales en valores y dignidad (art. 70), y el Estado tiene la obligación de proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación (art. 7). Esto supone adoptar medidas especiales para proteger la integridad cultural, social y económica de los pueblos indígenas, así como el entorno natural del que depende (arts. 8 y 80). Las lenguas indígenas son reconocidas como lengua oficial en sus territorios y los pueblos indígenas tienen derecho a una educación bilingüe (art. 10) que respeta y desarrolla su identidad cultural (art. 68). Todas las personas nacen iguales ante la ley, pero el Estado adoptará medidas especiales para

potenciar una efectiva igualdad y para proteger a los grupos discriminados y marginados (art. 13)³⁷.

Dentro del desarrollo de la misma se vio la necesidad de que el poder legislativo junto con la rama judicial, especificara cuál era el carácter especial de estas comunidades indígenas por lo tanto la Corte Constitucional en su sentencia T-188 de 1993, estableció que “las comunidades indígenas –conjuntos de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborígen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de gobierno y control social internos que las diferencian de otras comunidades rurales (D.2001 de 1988, art. 2º) –, gozan de un status constitucional especial.

Ellas forman una circunscripción especial para la elección de Senadores y Representantes (CP arts. 171 y 176), ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución o a las leyes (CP art. 246), se gobiernan por consejos indígenas según sus usos y costumbres de conformidad con la Constitución y la ley (CP art. 330) y sus territorios o resguardos son de propiedad colectiva y de naturaleza inajenable, inalienable, imprescriptible e inembargable (CP arts. 63 y 329). La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de las respectivas comunidades”³⁸.

Según esto, el avance legislativo que ha tenido este país desde la aplicación de la constitución de 1991, enfocado a los derechos humanos de las comunidades étnicas y sobre todo las indígenas se ha incrementado de forma exponencial; pese

³⁷ Human Rights Every Where. Marco legal para los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. 2008.

³⁸ Ibídem.

a dicho avance la aplicación de las diferentes normativas no ha generado los frutos mínimos exigidos por las comunidades.

En este sentido es necesario hacer un relacionamiento entre los aspectos sociológicos que influyen en las distintas situaciones que viven los indígenas y el marco legal desde la constitución de 1991, para analizar qué herramientas ya han sido dadas para encaminarnos a la solución de esta problemática.

La importancia del Convenio 169 de la OIT en Colombia

Es de vital importancia para esta investigación resaltar algunos hechos que precedieron la entrada en vigencia de la Constitución, como lo fueron la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la cual dio el primer reconocimiento a nivel mundial a acerca de los derechos que tienen las poblaciones indígenas y tribales en su Convenio 169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, con el objeto de eliminar toda clase de discriminación, reconociendo allí los derechos fundamentales, sus valores, sus costumbres, su arraigo nativo, la comprensión internacional y la iniciativa de cambiar las perspectivas de las diferentes naciones. En conjunto con el derecho fundamental de la dignidad humana, esta organización también se encargó de incluir derechos y libertades tales como la integridad, al trabajo, a la salud, respecto al cuidado y a la salvaguarda del medio ambiente, reconocimiento y protección de sus prácticas sociales y religiosas así como el fortalecimiento de su desarrollo económico social y cultural.³⁹

De esta forma, el Convenio 169 ratificado por Colombia como parte del ordenamiento jurídico colombiano, examina el derecho de las colectividades indígenas y tribales de informar en la toma de decisiones que perturben sus

³⁹. Congreso de la republica ley 21 (04, marzo, 1991) por la cual se aprueba el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. Reunión de la conferencia general de la o.i.t., ginebra 1989. Diario oficial. Bogotá. 1991. No. 39.

espacios, prerrogativa que además contribuye al resguardo del patrimonio material e inmaterial del país.

Según esto, es evidente para todas las comunidades a nivel nacional e internacional, que la apropiación de la dignidad humana hecha por el legislador del año 1991, respecto al hecho de transmutar la palabra “salvaje” citada en la ley 89 de 1890 -respecto a la forma de gobernarlos cuando fueran reinsertados a la vida civilizada-, por la de persona, por la de ser humano e igualmente por establecer la diversidad étnica y cultural.⁴⁰

Se pudo resaltar de esta manera, algunos otros derechos reconocidos constitucionalmente, a través de la lucha político- cultural de pobladores indígenas, como por ejemplo la creación de una jurisdicción especial, dando así una importancia y un realce en la autonomía de los pueblos indígenas, donde se les aplica una adecuación a su régimen institucional y organizacional, pero respetando la costumbre y cosmovisión tal y como es señalado por nuestro legislador en el artículo 246⁴¹ y 330⁴² de la constitución, así mismo el estatus territorial que se le da a las comunidades como parte de las entidades territoriales nacionales del país.

“La divulgación de los derechos humanos fundamentales y la instauración de los medios de protección para los individuos que los Estados están obligados a garantizar y respetar, ha revolucionado los conceptos cotidianos sobre el derecho internacional”, es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también estableció la garantía y protección a nivel global para que los estados consagrados a esta, mediante -en nuestro caso- el Artículo 93 respecto de los convenios y tratados internacionales como parte de nuestro ordenamiento interno, salvaguardando los derechos de las comunidades y dándole reconociendo el

⁴⁰. Congreso de la república ley 89 (25, noviembre, 1890) por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Bogotá. 1890.

⁴¹Asamblea nacional constituyente. Constitución política de Colombia. Capítulo 5 de las jurisdicciones especiales artículo 246.

⁴².Asamblea nacional constituyente constitución política de Colombia. Capítulo 4 del régimen especial artículo 330.

Estado Colombiano y a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de acuerdo a los términos fijados en la ratificación del Estatuto de Roma de 1998.

Para el año de 1997 exactamente el 18 de julio, fue creada “la ley 387 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”⁴³, dado que en este estudio se trata de una de las causas de desempleo por parte de miembros de las comunidades indígenas, como la es, el desplazamiento forzado de la mayoría de los pueblos indígenas debido a la desprotección del estado como garante de la atención especial de sus derechos haciendo ahínco en la pérdida de identidad, de cultura y de un desarraigo ocasionado por la falta de oportunidades laborales, económicas, inclusive de salud que afligen a esta población.

Respecto de ello, la actuación jurisprudencial puede situar en distintos contextos la referencia del desplazamiento forzado causado a los integrantes de los pueblos indígenas colombianos en donde, se muestra la omisión del deber de protección del estado como garante de derechos continuando la vulneración tolerando este tipo de quebrantamiento legislativo.

Por otro lado, como se vio anteriormente en el auto 004 del año 2009, se ven surtidos los graves efectos sobre las poblaciones indígenas, sobre todo en relación a las mujeres y niños, quienes encuentran mayor afectación de discriminación cuando hacen mención a lo siguiente:

(...) “Nos persiguen las imágenes de la angustia cuando tuvimos que salir corriendo con lo poco que teníamos o podíamos cargar para hacerle el quite a la muerte y desolación, en medio de esta angustia, quedamos a cargo de la familia aceptando actividades que no son

⁴³ Congreso De La República Ley 387 de 1997 (18 julio 1997) por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Diario Oficial. Ibagué.

*tradicionales a nuestras culturas como emplearnos en el trabajo doméstico, o en el peor de los casos llegar a vender nuestros cuerpos. (...) A las mujeres indígenas nos toca pelear para que nos reconozcan como desplazadas, pelear para acceder a la salud y a la educación que no es propia, preparar alimentos con comida ajena a nuestra cultura y cuerpo; luchar para que nuestras familias no se desintegren y los hijos no pierdan nuestra cultura”.*⁴⁴

Conflicto armado y desplazamiento forzado	Auto 004/09
Fecha	26 de enero de 2009
Magistrado Ponente	Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Referencia:	Amparo de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desalojados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco del progreso del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004

“En el aspecto internacional de esta problemática encontramos pues que la CIDH, consagra de especial importancia el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, es por ello que desde 1972 se empiezan a realizar por parte de

⁴⁴ Corte Constitucional. Auto 004/09. Conflicto armado y desplazamiento forzado-Situación del pueblo indígena Nukak-Makú.

la comisión interamericana un compromiso con estas comunidades”⁴⁵; en febrero de 2007 fue aprobado, el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, creando así un resguardo internacional a estas colectividades presentando un estudio riguroso en el continente Americano.

Gracias a la participación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para el 13 de septiembre de 2007, se obtiene la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas teniendo como base el respeto a los grupos étnicos y minoritarios como un derecho constitucional, ratificada por Colombia con la única finalidad de que se llegasen a tomar todas las medidas necesarias para la supervivencia y desarrollo digno de estos grupos, reconociendo de esta manera su diversidad étnica y cultural dentro del Estado.

“Este instrumento ha sido una referencia internacional por cuanto ha sido considerado como un reflejo de la opinión histórica, acerca del contenido e interpretación de los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades indígenas, es por ello que unos de los ejes centrales en los que se plasma esta reflexión son el principio de no discriminación, de acuerdo con el cual las personas indígenas gozan de iguales derechos al resto de la población y el goce de sus derechos especiales, asociados a la diversidad étnica, no deben convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los demás derechos”⁴⁶.

Por su parte la corte constitucional se ha pronunciado de manera ínfima respecto a la problemática que nos acoge, por lo pronto es necesario traer a colación lo abarcado en la sentencia T 380 de 1993, respecto al reconocimiento de las comunidades indígenas como titulares de derechos fundamentales y sujetos de especial protección constitucional, señalando que:

⁴⁵ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas.

⁴⁶ Naciones Unidas. Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En 1982, el Consejo Económico y Social estableció el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas (WGIP, por sus siglas en inglés) con el mandato de desarrollar estándares mínimos para la protección de los pueblos indígenas.

“el reconocimiento de sus derechos es imprescindible para garantizar la supervivencia de grupos humanos poseedores de una cultura diferente a la mayoritaria y que se encuentran en situación de vulnerabilidad desde el punto de vista constitucional, debido, entre otras razones, a (i) la existencia de patrones históricos de discriminación que les impiden el pleno ejercicio de sus derechos y su cultura; (ii) la presión ejercida sobre sus territorios, su forma de ver el mundo, su organización social, sus modos de producción y su concepción sobre el desarrollo, originada en la explotación de los recursos naturales y la formulación de proyectos de desarrollo de diversa naturaleza en sus territorios ancestrales; (iii) el grave impacto que el conflicto armado ha generado en su modo de vida, reflejado en desplazamiento forzado y afectaciones de especial gravedad a sus territorios ancestrales, usados como corredores estratégicos o escenarios directos del conflicto; y (iv) la marginación económica, política, geográfica y social que, por regla general, enfrentan como grupos minoritarios”.

Cabe mencionar los diferentes principios y valores que se consagran en la carta magna, iniciando en la concepción de la “democracia acogida por el Constituyente a la vez participativa y pluralista”⁴⁷, visión que ha reivindicado reivindica la coexistencia de diversas formas de ver el mundo y por lo tanto propicia la activa intervención de todas las culturas para la existencia del Estado señalando como parte del articulado 1 y 2 de la C.P.

⁴⁷ Constitución Política de Colombia 1991. De los Principios Fundamentales. Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Ahora bien, respecto al “principio de igualdad”⁴⁸ se mantiene en que por un lado se concreta en el carácter general de la ley y la prohibición de discriminación de lo que se ha tratado de exponer frente a la forma en que los miembros de las comunidades ingresan a diferentes ciudades del país teniendo que ser víctimas de una conmutación cultural que de una u otra y de otra manera, ordena la adopción de medidas de carácter especiales como el hecho de ser personas en condición de debilidad manifiesta, dentro de estas también se resalta la “diversidad étnica consagrada en el artículo 7”⁴⁹, la cual que describe el respeto y conservación de las diferencias culturales como elemento constitutivo de la Nación junto con el “principio de igualdad de culturas”⁵⁰ artículo 70 que prohíbe imponer las formas de vida mayoritarias como las únicas válidas o como opciones prevalentes, por encima de la visión del mundo de los pueblos originarios, y diversos de conformidad a los compromisos adquiridos por el Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Estas normativas han surgido en pro del mejoramiento del concepto de ser humano a nivel nacional e internacional, aplicando la participación de los diferentes representantes de las comunidades implementando así un Estado social de derecho, no siendo esta una tarea independiente, en el sentido de salvaguardar la esencia de estos orígenes, la cultura y la idiosincrasia.

⁴⁸ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

⁴⁹ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 70. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

⁵⁰ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

“Según los estudios de la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC, los resultados de los análisis hechos a ciertas comunidades indígenas del territorio nacional permiten conocer por lo menos el mínimo de la afectación que por ejemplo los megaproyectos causan en los territorios indígenas”. Dadas estas reiteradas situaciones respecto de las afectaciones a los derechos de las comunidades indígenas, como lo hemos visto anteriormente la preocupación ha llegado a abarcar espacios internacionales, como es el caso de Human Rights Watch, quienes a través de un estudio pormenorizado del marco legal para los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, señalan que “para los cálculos porcentuales globales de afectación sobre pueblos indígenas y sus territorios, se ha utilizado:

- La relación oficial de la ONIC, que incluye 102 pueblos: los 87 reconocidos por el Estado, 12 reconocidos por las organizaciones indígenas y otros 3 que se auto-reconocen desde su condición étnica y cultural.
- La cifra oficial de 711 resguardos (2006), que se irá modificando conforme avance la constitución de nuevos resguardos”.⁵¹

⁵¹ Ibídem.

CAPÍTULO III

Sobre el Derecho al trabajo y las Garantías laborales de las comunidades indígenas en Colombia

En este capítulo se realizó un rastreo documental sobre el derecho al trabajo de estas comunidades, teniendo en cuenta los distintos aspectos que han influido a lo largo de la historia, en la evolución de la concepción de los indígenas en el ámbito laboral, pero sobre todo, teniendo como eje central los tratados internacionales y la constitución política.

En el año 1991, en Colombia se abrió un nuevo régimen de protección legal de los derechos de las comunidades indígenas, este estudio que se abrió por la organización de Human Rights Everywhere, con ayuda y asesoramiento de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “se enfocó en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el sistema oficial de derecho del Estado colombiano. A raíz de esto las disposiciones contenidas en el OIT 169, se vieron reflejadas en la Constitución de 1991”⁵², relacionándose de alguna manera con los derechos de las minorías étnicas en varios de sus artículos como el 1, 2, 7, 8 70, 246, entre otros, referentes a los reconocimientos más relevantes para estas comunidades, como lo fueron la caracterización como jurisdicción especial específicamente y derechos colindados como la vida, la salud, la integridad étnica social y cultural y por supuesto el derecho al trabajo y el acceso a este como una forma de incorporación de sus miembros a la civilización.

En este sentido, la protección que se les otorgó a las comunidades indígenas, iba encaminada a preservar su idiosincrasia y sus costumbres sin dejar de lado el hecho de que son sujetos de derecho al igual que los demás habitantes de la nación.

⁵² MARCO LEGAL PARA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA, human rights everywhere. <https://hrev.org/proyectos/marco-legal-para-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-colombia/>

Es así, como en esta investigación se logró establecer la importancia que tuvo la constitución política de 1991, a la hora de sentar los aportes y prerrogativas que se han dado en el marco de la protección de los derechos laborales de los pueblos indígenas, teniendo como enfoque el derecho al trabajo digno, lo cual conlleva a adentrarse a la esfera del derecho laboral, tomando en cuenta si se les aplica o no el código sustantivo del trabajo.

En Colombia “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Es deber del Estado adoptar medidas en la legislación para garantizar a los trabajadores de los pueblos indígenas y tribales una protección eficaz en materia de contratación y de condiciones de empleo; debe hacer todo lo posible por evitar cualquier discriminación relacionada con el acceso al empleo, con la remuneración no equivalente al trabajo realizado; debe velar por la asistencia médica y social, la seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda y derecho de asociación de dichos pueblos”⁵³. Tradicionalmente en algunas comunidades como la Wayuu, existe preferencia en la oferta laboral para los miembros de este pueblo. Por ejemplo, en algunas empresas que funcionan en la Guajira, cuando un indígena Wayuu es incapacitado o renuncia al trabajo se piensa como primera opción para su reemplazo, en otro miembro de su comunidad, quien obtiene los mismos beneficios que tenía el anterior y es vinculado de la misma forma garantizándole no solo el derecho al trabajo sino también lo que eso consigo trae: la remuneración, estabilidad laboral, prestaciones etc.

Continuando con el eje central de este capítulo, otro aspecto a abordar es el ámbito internacional de los derechos de las comunidades indígenas, por lo que este estudio pretendió dar una breve introducción al marco legal para los derechos de los pueblos indígenas, partiendo de los elementos principales que permitieron que hoy en día estas comunidades tengan reconocidos sus derechos como minoría étnica y la forma como estos se ven amparados. En este sentido, desde la

⁵³ <https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Derecho-al-trabajo/>

perspectiva internacional, la cual ha sido la iniciación jurídica por medio de la cual se ha querido ratificar los derechos que tienen los pueblos indígenas en general, aplicándolo desde la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, en donde Colombia por su parte se abstuvo de participar en dicha votación.

“La OIT ha estado comprometida con las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas y tribales desde los años 1920. El Programa de Trabajo Decente de la OIT, con la igualdad de género y la no discriminación como preocupación transversal, sirve de marco para el empoderamiento de los pueblos indígenas y tribales. El acceso al trabajo decente permite a las mujeres y a los hombres indígenas aprovechar todo su potencial para convertirse en agentes de cambio en la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y promover el derecho a un trabajo digno, sea este dentro de sus resguardos o en la civilización y que en cualquiera de estos ambientes se les proporcione el mínimo vital, y las garantías laborales a que todo trabajador tiene derecho”⁵⁴.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Es importante precisar que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) es el principal organismo que agrupa y representa a los pueblos indígenas colombianos. “Fue fundada en febrero de 1982 en el Primer Congreso Indígena Nacional, llevado a cabo en Bosa, con la participación de 1.500 delegados indígenas de Colombia, donde se aprobaron los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. En la actualidad la sede de la ONIC se encuentra en la ciudad de Bogotá”⁵⁵.

⁵⁴ Pueblos indígenas y tribales. <https://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/lang-es/index.htm>

⁵⁵ <https://www.onic.org.co/pueblos>

En esta investigación se estableció que la (ONIC), “incluye 102 pueblos: los 87 reconocidos por el Estado, 12 reconocidos por las organizaciones indígenas y otros 3 que se auto- reconocen desde su condición étnica y cultural; La información sobre pueblos indígenas, resguardos y megaproyectos está estructurada alrededor de una base de datos geo- referenciada (la geodatabase TP2 o GdBTP2) que pretende convertirse en una herramienta práctica al servicio de la defensa de los derechos de los pueblos indígena⁵⁶”.

Esta organización nos suministró una serie de datos respecto de los principales grupos indígenas que han incurrido en el trabajo informal, valiéndose de sus artesanías y demás manualidades, alrededor de la carrera 7ma, como los emberas y kankuamos en su mayoría quienes han trabajado en este oficio sin recibir vinculación alguna a los proyectos de ayuda para estas comunidades implementados por el ministerio del interior, lo que nos llevó a analizar las políticas públicas establecidas por la secretaria distrital de la Alcaldía de Bogotá que en general tienen como objetivo “garantizar, proteger y restituir los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Bogotá, mediante la adecuación institucional y la generación de condiciones para el fortalecimiento de la diversidad cultural, social, política y económica y el mejoramiento de sus condiciones de vida, bajo el principio del buen Vivir⁵⁷”. Así encontramos el decreto 543 de 2011 y el decreto 503 de 2017, los cuales dispusieron el Plan Integral de Acciones Afirmativas para estas comunidades en donde lo que se implementó fueron talleres y espacios que preservaran la idiosincrasia y las costumbres de estos, destacando los aspectos que los distinguen de otros sectores de la población nacional, y donde se asume el compromiso de aplicar el enfoque diferencial y las acciones positivas en beneficio de estas poblaciones teniendo como responsables de su ejecución La Comisión Intersectorial Poblacional -CIPO- los Sectores Administrativos de Coordinación del Distrito Capital, así como de las

⁵⁶ Organización nacional indígena de Colombia (ONIC).

⁵⁷ Política Pública para los pueblos indígenas en Bogotá D.C

<http://www.gobiernobogota.gov.co/contenidos/politica-publica-los-pueblos-indigenas-bogota-dc>

entidades competentes responsables de las políticas sectoriales en los diferentes temas que afectan a los pueblos indígenas residentes en Bogotá, D.C,

Estas políticas van encaminadas principalmente a la inclusión y adaptación de los diferentes grupos que se asientan en la ciudad de Bogotá, pero principalmente en aras de proteger derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la salud, educación entre otros, pero no se ve garantizado el derecho al trabajo ni mucho menos promovido por parte de las autoridades encargadas de implementar y crear los espacios correspondientes que permitan el acceso al trabajo con todas sus prerrogativas.

Por su parte El Ministerio del trabajo estableció cuales son las funciones de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, las cuales se ejercen en el marco de las normas legales y tratados o convenios internacionales vigentes, mencionando específicamente en el numeral noveno la concerniente al objeto de este estudio:

“Proponer normas y procedimientos con el objeto de lograr el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y respeto de los derechos fundamentales a los jóvenes trabajadores, personas con discapacidad, *poblaciones Indígenas, Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras*, adultos mayores, trabajadores sexuales, población LGBTI, y en general todas aquellas comunidades que por su situación o condición puedan verse discriminadas o vulneradas, con énfasis en el sector rural”⁵⁸.

⁵⁸ Derechos Fundamentales del Trabajo. <http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo>

Del Código Sustantivo del Trabajo y su aplicación

Colombia es un país con unas políticas claras y precisas en lo relacionado al derecho al trabajo, siempre prima el interés común sobre lo personal. Muchas veces por desconocimiento de las leyes o por no saber a qué lugar acudir, algunas personas permiten que le sean violados sus derechos como trabajador, donde no tienen un contrato de trabajo, no son remunerados en equidad a la labor realizada, o los obligan a renunciar a ciertos beneficios. En el código sustantivo de trabajo en el artículo 1 dice que “la finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”⁵⁹, es por esto que toda persona tiene derecho a un salario digno, el cual lo ayude a realizarse como persona y tener una calidad mínima vital. Toda persona significa, mujer, hombre, mestizo, indígena, afrodescendiente o de cualquier etnia o condición social, política o económica que pudiera afectar el acceso a un trabajo digno.

La constitución política de Colombia dice que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y que debe ser garantizado por el estado y que nadie podrá impedir el trabajo los demás. Los principios generales del derecho (equidad, legalidad, igualdad en el trato de los trabajadores, buena fe), como son, el principio protectorio o -in dubio pro operario, el de la primacía de la realidad, que da validez a la relación de trabajo por sobre la existencia de un contrato laboral; el de irrenunciabilidad; por el cual el trabajador no puede renunciar a los derechos legalmente concedidos; el de la justicia social, y el de continuidad de la relación laboral.

En este orden de ideas, el código sustantivo de trabajo son normas dispuestas para todas las personas que residan dentro de Colombia sin importar si son

⁵⁹ Código Sustantivo Del Trabajo, Artículo 1.

extranjeros, siendo esto de vital importancia ya que garantiza la igualdad de condiciones para todos los trabajadores.

Teniendo en cuenta que la definición de trabajo según el código sustantivo de trabajo como lo dice en su artículo 1 “el trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”⁶⁰. Así pues, es claro que este código si les aplica a todos los indígenas que desempeñen actividades laborales legalmente reconocidas siempre y cuando estos se vinculen mediante las diferentes modalidades que consagra el derecho laboral, contrato de prestación de servicios, contrato laboral (fijo, indefinido o de obra o labor), sea para un privado o para el Estado Colombiano y que esto se lleve a cabo fuera de sus resguardos o territorios, pues en los últimos priman no solo sus costumbres sino sus propias leyes, así lo ha reconocido la constitución política de 1991..

De esta manera se vislumbra que aunque existen políticas públicas ya en ejecución en aras de proteger a los indígenas desplazados a la ciudad de Bogotá, la protección y los beneficios que se les brindan son en el marco de los derechos humanos de estas comunidades, pero el derecho al trabajo específicamente de estas personas víctimas del desplazamiento no se ve respaldado, por lo tanto no se ha visto materializada la Carta Política de 1991, que con todas las garantías que se requieren para este tipo de situaciones, no se han concretado por parte de las instituciones encargadas de resolver esta problemática.

⁶⁰ Código Sustantivo del trabajo. Artículo 1

En el siguiente cuadro se evidenció el porcentaje de población indígena en Colombia teniendo en cuenta la extensión territorial y los diferentes grupos étnicos que habitan el país.

Cuadro 1. Población indígena en Colombia país miembro del fondo indígena

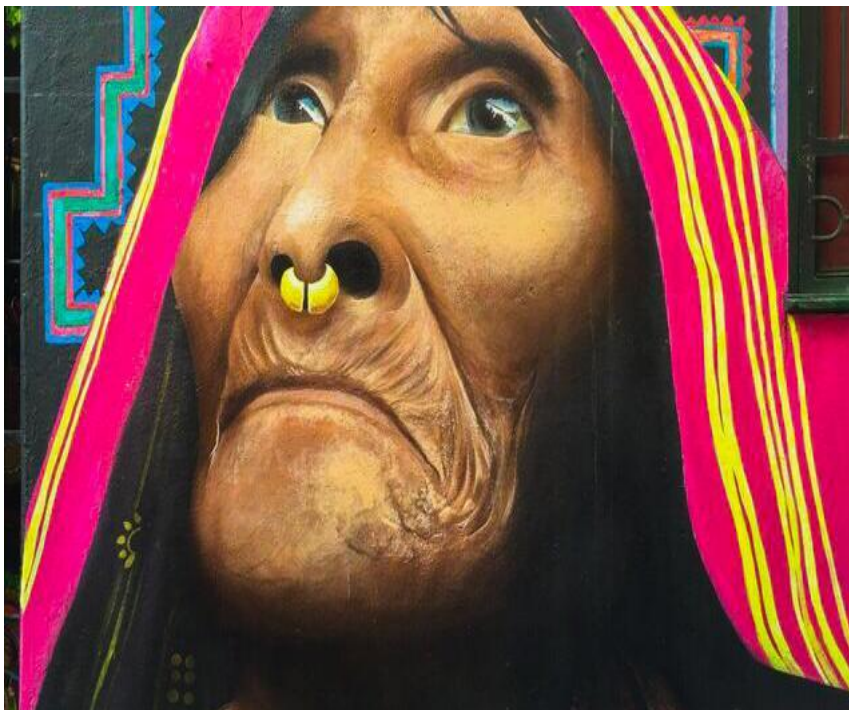
País	Habitantes	(km2)	Etnias	Población	%
Colombia	46,200.000	1,138,910	83	693,000	1,50

Fuente: Cletus Gregor. Pueblos Indígenas y Derechos Constitucionales.

Lo cual permitió establecer que estas poblaciones a pesar de ser una minoría inferior a la de otros grupos étnicos como las comunidades negras, requieren especial atención del estado e incluso más que aquellos, dado que sus derechos deben ser reforzados y garantizados en virtud de su condición de vulnerabilidad.

Por otro lado, en el proceso de observación realizado por el grupo de trabajo, a lo largo de la investigación se encontraron varias imágenes que permitieron evidenciar la actividad artesanal que desempeñan estos grupos en la zona de estudio, lo cual facilitó comprender más de cerca la situación que viven decenas de indígenas que se desplazan a la ciudad de Bogotá no encontrando más opciones de supervivencia que el trabajo informal.

Imagen 1. Grafiti indígena



Fuente: imagen tomada por las integrantes del proyecto

Imagen 2. Integrantes de comunidades indígenas entre la carrea 7ma y la calle 17 en el centro de la ciudad de Bogotá.



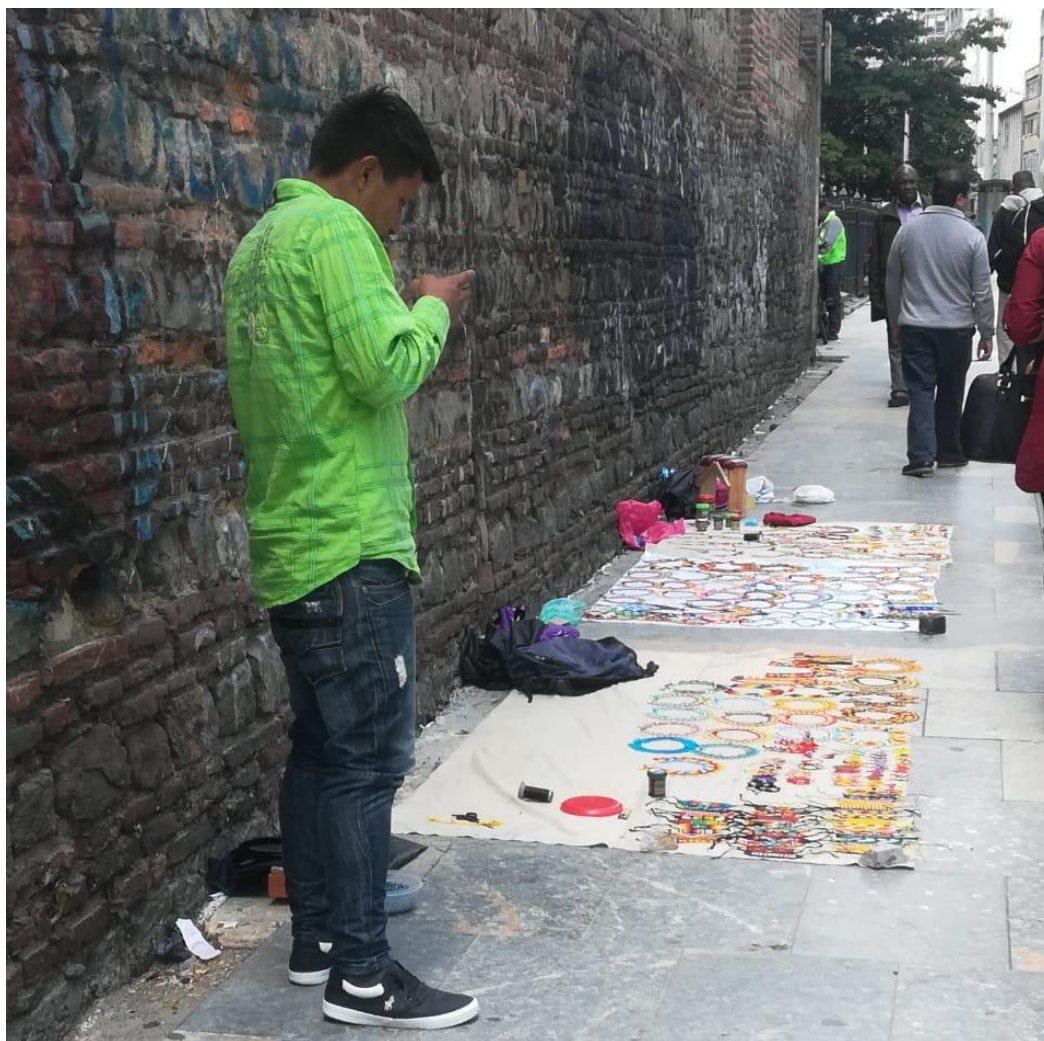
Fuente: imagen tomada por las integrantes del proyecto

Imagen 3. Integrantes de comunidades indígenas entre la carrea 7ma y la calle 17 en el centro de la ciudad de Bogotá.



Fuente: imagen tomada por las integrantes del proyecto

Imagen 4. Integrante de comunidad indígena entre la carrea 7ma y la calle 17 en el centro de la ciudad de Bogotá.

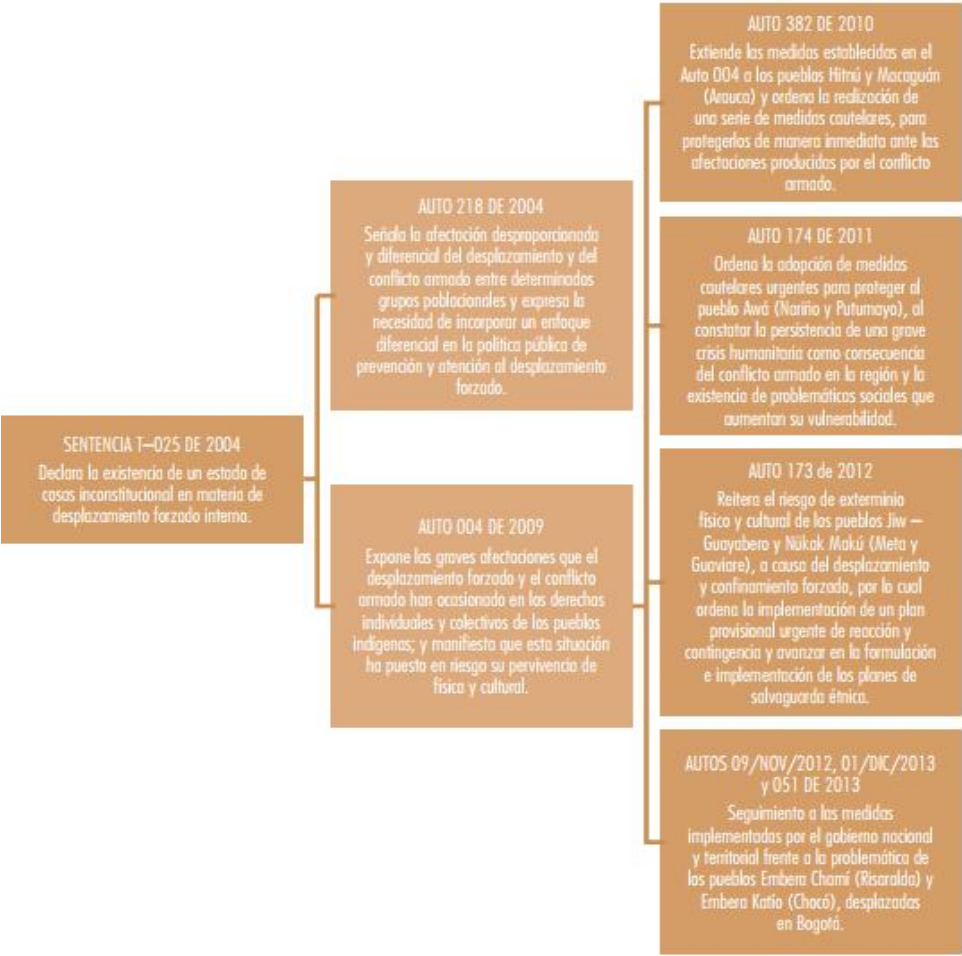


Fuente: imagen tomada por las integrantes del proyecto

Las imágenes anteriores fueron tomadas entre la calle 12 y la 19 sobre la carrera séptima en el centro de Bogotá, aproximadamente entre las 11 y 3 de la tarde, horas donde hay un flujo masivo de transeúntes que se acercaron a los tendidos con diferentes tipos de artesanías a comprar y preguntar por la elaboración de las mismas.

Ahora bien, dentro del material recolectado para trazar un camino claro en la investigación se encontraron los siguientes cuadros:

Cuadro 3. Cronología de las decisiones de la Corte Constitucional en materia de población indígena desplazada



Fuente: Corte Constitucional

Cuadro 4. Autos de la corte más relevantes en materia cultural y diferencial

AUTOS DE LA CORTE			
MAS RELEVANTES EN MATERIA CULTURAL Y DIFERENCIAL			
	AMBITO DE PROTECCION	LO QUE SE DECLARA	LO QUE SE ORDENA
AUTO 004	Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento.	Exterminio físico y Cultural de los pueblos indígenas	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar e implementar un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento. Formular e iniciar la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para 34 pueblos indígenas.
AUTO 005	Protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado	Protección especial como grupo étnico	<ul style="list-style-type: none"> Planes específicos de protección y atención Plan de caracterización de territorios colectivos Puesta en marcha de la ruta étnica propuesta por acción social Estrategia de atención a poblaciones confinadas Informes de la defensoría del pueblo caso curvaradó y jiguanadó Plan integral de prevención, protección y atención a la población afrocolombiana.
AUTO 006	Protección de las personas desplazadas, con discapacidad	Omisión de adelantar acciones específicas en el marco de un enfoque diferencial, como agravante de la situación de discapacidad.	<ul style="list-style-type: none"> Suplir falencias de sobre la población desplazada con discapacidad y establecer criterios unificados para la recolección de la misma. Diseño e implementación de un Programa nuevo para la protección diferencial de las personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado
AUTO 251	Protección de los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados	Vulnerabilidad especial de esta población ante el conflicto armado	<ul style="list-style-type: none"> Crear un programa para la protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes frente al desplazamiento forzado Garantizar el diseño y ejecución de proyectos piloto en el ámbito de la prevención de riesgos especiales que aquejan a los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.
AUTO 092	Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado	Impacto Desproporcionado de las Mujeres ante el conflicto	<ul style="list-style-type: none"> Creación de trece (13) programas específicos para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres. Adopción de órdenes individuales de protección concreta para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país. Comunicación al Fiscal General de la Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano.

Fuente: Ministerio de cultura. Desplazamiento y grupos étnicos. 2009.

Si se observan los cuadros anteriores, es claro que la problemática del desplazamiento indígena ha sido evaluada desde distintas instancias, sin evidenciar cambios significativos en las soluciones planteadas; si bien del 2004 al 2012 lo más relevante que se encontró, fue que se pasó de identificar el problema,

a darle seguimiento a las medidas implementadas por el gobierno nacional incluyendo medidas cautelares para proteger a los pueblos indígenas en estado de vulnerabilidad, sin embargo esas medidas no han mejorado las condiciones en las que estas comunidades de encuentran, del 2012 a la actualidad. Siguen presentándose desplazamientos masivos, sin que con ello el Estado dé una efectiva respuesta frente a las garantías reales que les permitan a estas comunidades acceder a un trabajo digno, que sea una fuente de subsistencia para ellos y sus familias.

De tal forma estos cuadros nos reflejan que pese a que a nivel jurisdiccional se han impartido pautas para la protección de los derechos de los indígenas, por ejemplo, la existencia de algunas resoluciones emitidas por el Estado declarándose por ejemplo como primera instancia el estado de cosas institucional con la sentencia T 025 del año 2004, en donde se establece unas ordenes impuestas al Estado para la confrontación con las problemáticas en las que se han visto inmersos a través de su desarrollo como comunidad, pero lo que se quiere demostrar es que pese a todo ello, no se le ha dado la importancia que merece al tema de la protección efectiva del derecho al trabajo de los grupos indígenas desplazados, si bien, se le han brindado alternativas y posibles soluciones a las consecuencias del desplazamiento, estas han sido en pro de los derechos humanos de estas comunidades y derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la salud, entre otros, pero el derecho al trabajo se ha dejado de lado desconociendo que es una herramienta imprescindible a la hora de implementar políticas públicas que le permitan a estos grupos adaptarse a grandes ciudades como Bogotá, desarrollarse y realizarse dignamente y con todas las garantías laborales necesarias.

Conclusiones

Finalmente para dar respuesta a la problemática planteada al comienzo de este proyecto, se consideró de vital importancia dejar sentados algunas respuestas a solicitudes que se hicieron a diferentes dependencias de la Alcaldía de Bogotá a en el marco de la investigación.

La subdirectora de Asuntos Étnicos, en la contestación con radicado 20184210502252 relaciona que *“teniendo como base la información proporcionada por el estudio de visibilidad estadística de los grupos étnico-raciales en Bogotá: Igualdad para un buen y mejor vivir, se relaciona las estadísticas presentadas en la Escuela Multipropósito para Bogotá Distrito Capital EMB del año 2014, en la cual se indican las localidades del Distrito con mayor concentración de población indígena en Bogotá”*⁶¹. Siendo estos los datos más recientes y actualizados luego de los resultados estadísticos que se presentaron del Censo Nacional del año 2005.

Localidad	Porcentaje de población indígena (%)
La Candelaria	1,3%

Fuente: Encuesta multipropósito para Bogotá Distrito Capital –EMB. 2014.

En un breve ejemplo de cómo se evadieron las soluciones a dichas problemáticas en la esfera de la comunidad indígena, frente a la misma pregunta en cuestión, la Alcaldía Mayor de Bogotá, manifiesta que la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, posee una copia de los censos poblacionales de los 5 cabildos indígenas que cuentan con el estatus jurídico

⁶¹ Alcaldía Mayor de Bogotá. Respuesta a la solicitud de información sobre la población indígena que habita en la localidad de la Candelaria. Subdirectora de Asuntos Étnicos Nur Fannery Valencia Mosquera.

otorgado por dicha entidad y señala que dentro de este grupo se encuentran los siguientes pueblos que habitan en la localidad de la Candelaria: Inga y Kichwa.

El grupo de trabajo deja plasmada una solución que el gobierno Colombiano podría ejecutar dentro de la ciudad, manteniendo el estado social de derecho, sin que esto implique la damnificación del mismo, ni que ello deslegitime la continua vulneración de los derechos de estos pobladores.

Ante el interrogante de ¿cómo podrían hacerse efectivas las políticas públicas establecidas en el estado Colombiano?, se encontró que las instituciones que atienden a los indígenas desplazados, carecen de comunicación y coordinación interinstitucional, en su deber de integralidad en el proceso de atención emergente de estas comunidades, a pesar de la existencia de comités interinstitucionales que se ocupan del tema, por esta razón solicitamos información a la Alcaldía Local de la Candelaria para conocer qué medidas se han tomado en la localidad en relación al trabajo informal y a la protección del derecho al trabajo de los grupos minoritarios o qué alternativas se les han propuesto para i que llevan a cabo estas actividades, a lo que se obtuvo como única respuesta una nueva remisión de dicha solicitud a la Alta Consejería para las Víctimas.

Con la finalidad de que dieran una respuesta de fondo, se les solicitó a otras dependencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Secretaría General de la Alcaldía, para que explicaran cómo funciona el plan de acciones afirmativas y la manera como estos han beneficiado a la población indígena y de qué manera se ha reforzado el derecho al trabajo individualmente considerado para estas comunidades. En razón de lo anterior se considera que el problema radica en las instituciones encargadas de ejecutar estas políticas públicas, por lo cual la solución estaría en que se implementara de manera eficaz la vigilancia, supervisión y colaboración de las entidades encargadas de llevar a cabo estas

políticas de diferente naturaleza, esto con el fin de que se vea reflejado el interés del gobierno en mitigar la situación desfavorable de estas comunidades.

Es por esto que también se encontró la construcción de la Política Pública de Trabajo Decente y Digno, ese trabajo fue producto de un amplio proceso de deliberación en el que participaron a través de un ciclo de talleres, donde se realizaron 8 talleres con diferentes poblaciones relevantes del mundo del trabajo en Bogotá, las entidades encargadas del mismo fueron La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, con el apoyo de los actores más relevantes del trabajo de la ciudad, setiene entonces un proyecto de asistencia por parte del Estado, dirigido a integrantes de diferentes comunidades indígenas que se encuentren en la ciudad de Bogotá, el cual otorgue un derecho al trabajo digno en lugares de trabajo pertenecientes a diferentes sectores económicos de la sociedad, tales como ferias artesanales, museos nacionales, escuela de formación, entidades estatales etc.

De esta manera la hipótesis planteada no queda validada en el proyecto de investigación, porque no se trata de crear una política pública laboral para grupos indígenas, sino de reestructurar una ya existente en donde la efectiva protección del trabajo decente y digno sea un fin principal dada las condiciones de los desplazados a la ciudad de Bogotá.

Para los fines de esta política pública, el Distrito Capital, adoptó el contenido del trabajo decente y el trabajo digno establecidos por la Organización Internacional del Trabajo –OIT– y por la Constitución Política de Colombia. Por tanto, reconoció que el trabajo decente y digno corresponde a una aspiración universal de dignidad, justicia, seguridad material y realización personal de los (as) trabajadores (as). En tal sentido, los entiende como:

1. Trabajo digno: Hace referencia a las garantías constitucionales como igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

2. Trabajo decente: Trabajo productivo desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que se plasma a través del respeto de los principios de igualdad de género y no discriminación.

“Esta política contiene indicadores que permiten medir o valorar ante todo la cantidad de oportunidades de trabajo en la ciudad, esto es, la medida en que todas las personas dispuestas a trabajar encuentran oportunidades de trabajo como punto básico de realización del derecho al trabajo y el trabajo decente. Esa medida es cualificada y complementada por las otras dimensiones del trabajo decente. No obstante, esta dimensión también se cualifica en uno de sus indicadores: el grado de informalidad en el trabajo”⁶² (Pineda, 2013).

Finamente, lo que el grupo de trabajo propone es la reestructuración de esta política pública, es decir, aunque se ajusta a la delimitación espacial, temporal y conceptual del proyecto de investigación, se considera que debe haber un capítulo de esta dirigido a las necesidades de las comunidades indígenas, en donde el acceso al trabajo decente y digno de estos, en calidad de grupo social vulnerable sea prioritario dentro de los fines generales de la política, promoviendo espacios pertinentes para llevarlo a cabo.

Todo lo anterior con la debida estipulación de las garantías laborales que sean necesarias para el desarrollo de su función, es decir, con las capacitaciones,

⁶² Política pública de trabajo Decente, Capítulo II, Artículo 5, Numeral 5.

escuelas de formación, talleres, clínicas especializadas y demás que sean pertinentes.

Dentro de estas esferas de trabajo que se podrían llegar a instaurar en la ciudad, de conformidad a la capacidad que cada integrante de la comunidad posea, pueden llegar a laborar con la implementación de ciertas actividades como enseñanza de elaboración de manualidades; enseñanza de lenguas étnicas; venta de artesanías, manualidades, obras de arte o cualquier otra forma de expresión artística en que se desenvuelven; enseñanza de territorio, mapeo y geografía; enseñanza de costumbres e historia en su cultura (dependiendo de cada comunidad a la que pertenezcan) y también a la adaptación en ambientes laborales de cualquier otra naturaleza en los que ellos se quieran desempeñar.

Se espera que se pueda implementar la solución propuesta, la cual tienen cabida dentro de las entidades estatales que se mencionaron a lo largo del proyecto, garantizándoles de tal forma, una efectiva ejecución de la normativa nacional e internacional, con el fin de que estas personas se encuentren avaladas por el gobierno, sin la premura de ser perseguidos y vulnerados sintiéndose confiados de del gran aporte que son para esta sociedad, para que resalten dentro del mismo como un símbolo de un Estado unido y protector.

Bibliografía

1. Anaya James, Los pueblos indígenas en el Derecho Internacional.2005.
2. Balza, Vladimir y Cardona, Diego. La responsabilidad social empresarial y la lucha contra la pobreza. Saber, ciencia y libertad. 2016.
3. Bushnell, David Colombia una nación a pesar de sí misma. 2000.
4. Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Capítulo 5 de las jurisdicciones especiales. Artículo 246.
5. Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Capítulo 4 del régimen especial. Artículo 330.
6. Colombia. Congreso De La Republica Ley 21 (04, Marzo, 1991) por la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. Diario Oficial. Bogotá. 1991. No. 39.720.
7. Colombia. Congreso De La República. Ley 16 de 1972 (30 diciembre 1972) por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969". Diario oficial No.33.780. Bogotá D.C.
8. Colombia. Congreso de la Republica Ley 89 (25, Noviembre, 1890) Por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Bogotá. 1890.
9. Colombia. Presidencia de la República. Decreto Ley 2663 de 1950 (05 agosto 1997) por el cual se promulga el código sustantivo del trabajo. Diario oficial No. 27407. Bogotá D.C.
- 10.Colombia. Congreso de la República. Ley 387 Art 1 (18, julio, 1997). Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1997.

- 11.Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-129/11. Consulta previa a comunidades y grupos étnicos.
- 12.Comisión Interamericana De Derechos Humanos. Medidas Cautelares 131/12 Hernán Henry Díaz, Colombia.
- 13.Corte Constitucional. Auto 004/09. Conflicto armado y desplazamiento forzado-Situación del pueblo indígena Nukak-Makú.
- 14.Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, art. 1.1.
- 15.Departamento Administrativo Nacional De Estadística (2006). Proyecciones municipales 2006- 2020.
16. Díaz Henry, Medidas cautelares, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- 17.Eugenio, Introducción a las Políticas Públicas.2003
- 18.Fernández Antonio. Derecho Natural. Introducción Filosófica al Derecho.1983
- 19.Guerrero Jhon, La interculturalización del derecho y la jurisdicción especial indígena, hacía una fundamentación del pluralismo jurídico en Colombia.2014.
- 20.Guevara Rubén Darío. La Nueva colonización urbana el desplazamiento forzado. Año de presentación.2003.
- 21.Gutiérrez Jairo. Revista Credencial Historia.2010.
- 22.Heidegger Martin. Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung. 1993.
- 23.Holmes, O.w. Los fundadores americanos En: Sociología del derecho
- 24.Horbath Jorge Enrique, La discriminación laboral de los indígenas en los mercados urbanos de trabajo en México.2006
- 25.Human Rights Everywhere, Marco legal para los derechos de los pueblos

indígenas en Colombia, (HREV), 2008.

- 26.** Informes pueblos indígenas en Colombia. UNICEF.
- 27.** Iturralde, Diego. Reclamo y reconocimiento del Derecho Indígena en América Latina: Logros, límites y perspectivas. 2005
- 28.** Mendez Juan Felipe. Entre excusas y desconocimientos. ¿El enfoque diferencial como la solución para las comunidades étnicas? Análisis de la atención al desplazado indígena desde una perspectiva diferencial. 2012
- 29.** Mendoza, Andrés. El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado. Revista de economía institucional. 2012.
- 30.** ONIC. ¿cuáles son, cuantos y donde se ubican los pueblos indígenas de Colombia? 2016.
- 31.** ONU. La situación de los Pueblos Indígenas del mundo. 2009
- 32.** Organización Internacional Del Trabajo. Trabajo infantil y pueblos indígenas. 2006.
- 33.** POUND, Roscoe. Los fundadores americanos En: Sociología del derecho. 1945.
- 34.** RUANO, Jiménez alba Jaqueline. Inserción laboral de la población desplazada por el conflicto armado en la frontera Colombo ecuatoriana. 2012.
- 35.** YÉPEZ Cacildo. Reunión UNICEF. 2003.
- 36.** YRIGOYEN Fajardo, Raquel. Hitos el reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino.
- 37.** EIGPP, Escuela intercultural de gobierno y políticas públicas. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe Programa de formación de líderes indígenas. Módulo de historia y cosmovisión indígena. 2007.
- 38.** MARCO LEGAL PARA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA, human rights every where. <https://hrev.org/proyectos/marco->

legal-para-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-colombia/

39. <https://www.onic.org.co/pueblos>

40. Derechos Fundamentales del Trabajo.

<http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo>